

BRASIL

LA AUTOPISTA QUE MATA

«Es como si el Gobierno brasileño se contentase con marcar sobre el mapa una vasta superficie para venderla acto seguido a cualquiera de las grandes compañías coloniales sin preocuparse para nada de lo que ocurre efectivamente en la región —dice el antropólogo Mario da Costa—. Desde un principio



parece haberse llegado a un acuerdo tácito: si hay que sacrificar a los indios y colonos para el desarrollo del Amazonas y el bien del país, que las cosas sigan su curso...».

Y las cosas siguen su curso. La Transamazonia, comenzada en 1964, se convertirá en la mayor red de autopistas del mundo. Cinco mil kilómetros desde la costa Noroeste del Brasil, hasta la frontera peruana, cinco mil kilómetros a través de espesísimas selvas: la pista de la expansión es al mismo tiempo la pista de la muerte. Por donde pasan los «bull-dozer» mueren los indios. En 1964 eran éstos doscientos mil; hoy no llegan a cien mil.

Trágica, desesperada, su situación no es hoy muy diferente de lo que era antes, de lo que ha sido siempre. Reducidos a la esclavitud desde los inicios de la colonización portuguesa, los tres millones de indios del Brasil han sido explotados

y diezmados por la violencia y las enfermedades. Hoy se dispara contra ellos, se los rocía de «napalm», se los envenena.

He aquí un ejemplo: una de las carreteras construidas por los brasileños se proyectó de modo que atravesara el Parque Nacional de Xingu, extensa reserva que albergaba a más de dos mil indios pertenecientes a catorce tribus diferentes. En la actualidad, indefensos frente a las enfermedades de la civilización —tuberculosis, sarampión, malaria, alcoholismo—, los indios del Xingu van camino del total exterminio. Por otro lado, y esto no es secreto para nadie, el Servicio de Protección de los Indios del Brasil (SPI) fue cómplice activo de este aniquilamiento sistemático. Hace cuatro años, el Gobierno brasileño acabó por admitir que el SPI se había convertido en un «nido de corrupción, en una plataforma para la ejecución de ciegos asesinatos». El Gobierno llegó incluso a reconocer que con la connivencia del SPI, les habían sido robados a los indios bienes por valor de 62 millones de dólares y se habían llevado a cabo sangrientas matanzas. Los indios cintas largas, por ejemplo, fueron atacados con dinamita desde aviones, mientras que la tribu Belcas-de-Pau fue exterminada a base de alimentos envenenados con arsénico. Pero aunque los directivos del SPI y cincuenta y ocho funcionarios de la agencia han sido acusados de crímenes que van desde la malversación de fondos hasta el asesinato puro y simple, ninguno de ellos ha comparecido hasta la fecha ante los Tribunales.

EL SEPULTURERO

Lo único que hizo el Gobierno fue comprometerse a disolver el SPI, creando en su lugar la Fundación Nacional India (Funai), que proclama como objetivo respetar «al pueblo indio y sus instituciones», así como garantizarles «la posesión permanente y la utilización exclusiva de la tierra y sus recursos naturales». Pero en el Brasil, las promesas no comprometen a nada. Se finge ignorar la anarquía criminal que allí reina. Recientemente, por ejemplo, se envió a un destacamento de Policía a verificar «informaciones» según las cuales doscientos indios macuparis estaban obligados a trabajar bajo la amenaza de las armas y sin recibir paga alguna. La patrulla necesi-

tará varias semanas solamente para hacer el camino de ida y vuelta.

Tribus como la de los acurinís, de piel clara y ojos azules, serán pronto expulsadas de sus aldeas para dejar sitio a las máquinas, a los ingenieros, a los buscadores de petróleo, a los aventureros. Y los tapirapes, que llevaban varios siglos residiendo en los terrenos pantanosos del Mato Grosso, han sido trasplantados por la fuerza a una reserva donde sólo muy pocos podrán sobrevivir. Asqueado por la hipocresía del Gobierno, Antonio Cotrim, uno de los principales defensores de los indios, dimitió el mes pasado de su puesto en la Funai, organismo al que calificó de «sepulturero de los indios».

La desilusión de Cotrim es comprensible. El Brasil de hoy es presa de una devoción abstracta por el «desarrollo económico», que lleva a cabo de forma oficial lo que hasta ahora se hacía anárquicamen-

te: la aniquilación de los indios. El actual dirigente de la Funai, el general en situación de reserva Jerônimo O. Bandeira de Melo, ha resumido perfectamente la actitud del Gobierno brasileño al declarar: «No podemos tolerar el que la ayuda a los indios obstaculice el desarrollo nacional». «Necesitamos esa carretera, cueste lo que cueste», precisa un oficial de Brasilia.

Esta actitud ha sido condenada públicamente por veinticuatro historiadores y sociólogos brasileños, quienes han afirmado en fecha reciente: «Los indios supervivientes han sido calificados de inútiles, cuando no de obstáculos nocivos para el desarrollo y el progreso del país».

En el Brasil, como en los Estados Unidos, no se preocuparán colectivamente por la suerte de los indios hasta que éstos se hayan convertido en una curiosidad histórica. ■ JOHN BARNES.

ITALIA

4.570 DETENCIONES

Hay actualmente en las cárceles italianas un mayor número de prisioneros políticos de izquierda del que había bajo la dictadura de Mussolini a finales de 1936. Los cargos bajo los cuales se detiene a estos activistas son los mismos que hace veintiséis años: el Código Penal italiano no ha cambiado desde la época fascista; los magistrados tampoco, en muchos casos.

Un estudiante de liceo, por ejemplo, que escribió en la servilleta de papel de un restaurante unos versos en los que se alagaba de la muerte del comisario Calabresi, acaba de ser condenado a catorce meses de cárcel por «apología del crimen». Por el mismo delito, aun-

que cometido mediante la distribución de octavillas, cuatro militantes de Lotta Continua, de Turín, han sido condenados a dieciséis meses de cárcel.

En Florencia, cinco militantes de extrema izquierda han sido condenados a penas de cárcel que oscilan entre los dos y tres años por haber «perturbado» un mitin de los dirigentes fascistas Almirante y Biringelli. Por haber tratado de hacer lo mismo en Pisa, a pesar de un gigantesco despliegue policiaco puesto a disposición de los oradores fascistas, un menor, Paolo Serantini, falleció en la cárcel a consecuencia de una fractura de crá-

Pietro Valpreda.

